



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 63

ENERO 2012

Simulacro de normalidad



Pese a la profunda fractura generada en el país por las fraudulentas elecciones municipales del 2008, los tramposos comicios presidenciales del 2011, la subordinación de las instituciones a la cúpula gobernante y la persistente desigualdad social, se pretende instaurar progresivamente un aire de normalidad en el que respiran diversos intereses marcados por un calculado acomodo al nuevo escenario.

La investidura

La toma de posesión del cargo presidencial reviste una doble dimensión. Por un lado establece la continuidad de procedimientos institucionales y por otro, es un acto político de reconocimiento de la opción triunfante. Ambos en condiciones normales contribuyen a asentar tanto la legalidad como la legitimidad de la máxima autoridad, en este caso del presi-

dente de la nación. En la reciente toma de posesión de Daniel Ortega estos aspectos no estuvieron presentes. Se trató de un acto unilateral de imposición de lo hecho.

A la deficiente calidad democrática de las elecciones se sumó la previa ilegalidad de la candidatura de Ortega, la parcialidad del Consejo Supremo Electoral y la inexistente capacidad del poder judicial para garantizar derechos a todos los ciudadanos. La investidura viene entonces no a consolidar la legalidad y legitimidad sino que es la coronación de una serie de actos transgresores impuestos.

La toma de posesión es entonces un acto de afirmación del poder pero cuya base se afirma en sus propios recursos, la indefensión de la sociedad y la fachada de legalidad que otorga el control institucional. El poder puede mantener el simulacro de normalidad por la fuerza de la que dispone, por lo menos hasta que la conserve, pero ninguna sociedad puede construirse con estabilidad sobre la base de una disensión tan importante. De allí que las apariencias de normalidad sean indispensables a la continuidad de lo adquirido con malas artes.

Los acomodados

En toda situación dónde la continuidad tiene un origen fácti-

co, queda abierta la interrogante de la viabilidad de la normalización. Si nadie ni nada la interrumpe, inevitablemente los actores y grupos de interés buscarán ya sea el acomodo o las formas de oposición disponible.

Entre estas dos líneas de acción se configuran los espacios de conflicto y negociación. Por aho-



ra, esto apenas está en su inicio. Sin embargo, es posible ver claramente los signos anunciadores de ambas posiciones, sobre todo porque esta situación se viene desarrollando desde 2008, cuando las municipales marcaron un punto de inflexión del régimen hacia el continuismo forzado.

El acomodo tiene muchas caras, algunas a regañadientes, pero empresarios, iglesia, medios, sociedad civil, buscan un espacio

desde dónde negociar. Quizá la más simbólica sea la reivindicación del COSEP de disponer un espacio propio en la Asamblea Nacional y de marcar su propio protagonismo en la relación con el gobierno.

En el estado de cosas actual la triangulación gobierno, empresarios y el poder discrecional

para aplicar la fuerza y aplastar a los que no se ajusten al esquema, es suficiente para mantener el continuismo. Ni siquiera hace falta la Asamblea Nacional o el poder judicial, si no fuera por las molestas apariencias que hay que conservar.

Sin embargo, pese a todo, el perfil de una oposición se mantiene con las denuncias hechas por diferentes instancias de sociedad civil sobre el fraude electoral, siendo una fisura que mantiene resquebrajada la vitrina de la normalidad. Esto no será suficiente

en el mediano plazo y rápidamente se enfrentarán al desafío de crecer y proyectarse.

El poder absoluto

Quizá la normalización tenga su más fuerte desafío no solamente en la oposición sino que la propia concentración del poder. El poder absoluto requiere éxito absoluto. Los logros parciales y la propaganda masiva pueden servir durante un tiempo, pero al

final hay que responder por todo sin que se pueda culpar esta vez a otros si la cosas no salen bien.

Cuando se controla la Presidencia, la Asamblea Nacional y todos los poderes e instituciones del Estado los resultados deben a estar a la medida de ese control. La reducción de la pobreza, los indicadores sociales, la calidad de las instituciones y la corrupción no dependen ahora de nadie más, al menos en términos de responsabilidad política.

La gestión de ese poder absoluto no será sin embargo una cuestión simple. Los anillos del poder cada vez más concentrados también harán fluir los conflictos internos hacia la cúspide, como se ha visto cada vez que se han producido, como en el caso de la alcaldía de Managua y de León o las reyertas entre Lenin Cerna y la clique de la primera dama.

Los riesgos de implosión serán también mayores si la redistribución de favores y los equilibrios en las posiciones de los privilegios se alteran conflictivamente. La pirámide del poder se mantendrá mientras nadie la ponga a prueba. El último antecedente simbólico de este tipo fue el Herty Lewites, cuya simple amenaza de competir con Ortega activó la reacción del poder que se llevó por delante a todos los que quisieron manifestarse en su favor.

La gestión del poder absoluto alinea también a los que buscan negociar con el o simple-

mente acomodarse. La cuestión no es tampoco menor, dado que según la distancia y la aceptación del poder de quienes buscan posicionarse favorablemente, se verán más o menos tolerados o beneficiados. También esto se verificará de acuerdo a la práctica y los resultados. Las ilusiones y



expectativas tendrán allí su hora de prueba.

Nicaragua ha entrado en una nueva fase de su historia en la que ha reconstruido luego de dos experimentos mayores, post revolución y post transición, un nuevo esquema de configuración del poder. Un poder concentrado que se ejerce con la vieja técnica de la mano que aprieta pero no

ahorca y bajo el cual seguidores y opositores deben someterse.

Las condiciones en que esto ha ocurrido, una sociedad exhausta y desmoralizada, con grupos de poder sin dependencia alguna de la opinión ciudadana o impermeable a su presión, auguran un recorrido complejo y peligroso.

No hay nada fácil a que echar mano ni procesos que constituyan una nueva base de partida. Esto no es determinismo, son solo las condiciones en que Nicaragua, después de experimentar, ha quedado nuevamente sujeta a condiciones que entranpan su desarrollo político, social y económico.

Puede haber crecimiento pero no habrá menos desigualdad y menos pobreza, puede haber cooperación y préstamos pero se los comerá una institucionalidad adicta al dinero fácil; podrán haber discursos pero no habrá menos corrupción; podrán haber elecciones pero no habrá legalidad y

legitimidad democrática; podrán haber invocaciones religiosas pero no habrá una ética de lo público; podrá haber una fachada legal pero no habrá control sobre el poder paralelo.

El aire de normalidad no puede esconder estas contradicciones pero se nutrirá hasta cuando se toleren las rutinas de siempre: el poder a los poderosos, los negocios a los negocios y los acomodados a los acomodados.